

Las medidas tomadas por el gobierno de Macri en sus primeros meses apuntan a un ajuste con mayor marginalidad y exclusión en el horizonte. En ese marco, vuelven a asomar las organizaciones territoriales surgidas en los años 90, que a pesar de su experiencia de lucha enfrentan serios problemas no resueltos durante el kirchnerismo.

Acumulación y fragilidad de las luchas sociales

El (nuevo) desborde plebeyo

por Maristella Svampa*



M.A.f.I.A.

En nueve meses de gestión, el gobierno de Mauricio Macri evidencia rupturas pero también continuidades respecto de la gestión anterior. Empecemos por las rupturas: hasta el 10 de diciembre de 2015, Argentina estuvo gobernada por un progresismo que podríamos caracterizar como un populismo de alta intensidad, marcado por la concentración del poder político en el Ejecutivo, el sobreprotagonismo de ciertos sectores de clases medias y, por último, la subalternización –por diferentes vías– de amplias franjas de los sectores populares. La alternancia político-electoral implicó el pasaje hacia un escenario pos-progresista, liderado por una derecha aperturista, con fuerte presencia de funcionarios pertenecientes a la élite empresarial, que ha ido implementando una política de ajuste o “sinceramiento” (de la inflación, de las tarifas de los servicios básicos, del valor dólar, del pago a los *holdouts*, entre otros) que favorece a los sectores más concentrados de la sociedad.

Ahora bien, es indudable que el gobierno anterior dejó como herencia problemas profundos, entre los cuales se destaca el deterioro de los índices macroeconómicos, acompañado de medidas que acentuaron los desequilibrios (financieros, fiscales). Sin embargo, lejos de la promesa de “pobreza cero” de la campaña electoral, los caminos elegidos por Macri apuntaron a realizar un ajuste tradicional, que golpeó duramente a los sectores más vulnerables, tal como demuestran el modo en que buscaron implementarse los ajustes de las tarifas de servicios, signado por la mala praxis, y el escaso registro por parte del nuevo oficialismo de la diversidad social, regional y geográfica del país. Así, al compás de estas medidas, una proyección del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) para los primeros meses de gobierno informaba del incremento de un millón y medio de pobres como consecuencia de las políticas implementadas, lo que sumaría ya 13 millones de pobres, esto es, un 34,5% de la población (1).

En consecuencia, por el momento el espacio político del oficialismo es estrecho en términos de alianzas sociales, pues no queda claro –no estamos frente a una gestión consolidada– sobre qué sectores, además del bloque empresarial dominante, se apoyará el actual gobierno y qué estrategias y dispositivos de resubalternización implementará, en un contexto de ajuste, tanto respecto de las clases medias, que hoy ven amenazada la inclusión por el consumo (garantizada por el gobierno anterior), como respecto de las clases populares, ante las cuales parece ampliarse de modo vertiginoso el horizonte de la marginalidad y la exclusión.

Rupturas y continuidades

En cuanto a la dinámica del capital (no sólo respecto de la contradicción capital-trabajo sino también de la relación capital-naturaleza), es claro que el gobierno actual empeora la relación de asimetría del trabajo frente al capital, fortaleciendo la opción por los mercados y perjudicando así a distintas franjas de trabajadores de las clases medias y sobre todo, de tra-

bajadores de los sectores populares. Al mismo tiempo, respecto de la relación capital-naturaleza se perciben continuidades, pues el nuevo oficialismo apuesta a profundizar la commoditización de la naturaleza por la vía de la expansión del extractivismo (agronegocios, megaminería, fracking, represas, urbanismo neoliberal), consolidando así la brecha socio-ambiental abierta durante el ciclo anterior.

En consecuencia, el escenario pos-progresista indica una mayor conflictividad. En esta línea, el conflicto sindical viene manifestándose en todas sus aristas y variantes (protestas puntuales, huelgas en el ámbito privado y público, movilizaciones generales de las diferentes corrientes sindicales), en un contexto –sobre todo en las provincias– de sucesivas represiones y encarcelamiento de activistas. Así, el pos-progresismo facilitaría un contexto de “unidad en la lucha”, más allá de las heridas políticas abiertas durante el período kirchnerista, tal como lo muestran las dos CTA (de los Trabajadores, liderada por Hugo Yasky, y Autónoma, por Pablo Micheli), que han realizado conjuntamente varias movilizaciones, tanto para repudiar los hechos de represión y criminalización (especialmente la encarcelación de la dirigente social Milagro Sala), así como el veto presidencial a la Ley de emergencia ocupacional, conocida como Ley antidespido. Por otro lado, las tres CGT existentes realizaron el lunes 22 de agosto un congreso de reunificación para garantizar una transición por la vía de un triunvirato, luego del alejamiento de Hugo Moyano. Pese al gran malestar que existe en las bases, las negociaciones abiertas con el gobierno de Macri plantean dudas sobre el interés de algunos jefes sindicales ligados a las CGT en apelar a la pura lógica de movilización, previendo la ingobernabilidad que esto podría conllevar en el marco del nuevo oficialismo, que además de no estar consolidado, no cuenta con mayoría parlamentaria.

Por otra parte, respecto del extractivismo, el gobierno de Macri avanzó sobre varios frentes, aunque sin discursos vergonzantes. Así, eliminó las retenciones a la minería y disminuyó las de la soja; transfirió la Secretaría de Minería al nuevo Ministerio de Energía y Minería, a cargo del ex CEO de Shell; creó un Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, donde nombró a alguien que confiesa no saber nada del tema, pero recorre el país defendiendo la megaminería. Asimismo, mantiene el subsidio a las petroleras y, pese al fallo de la Justicia, se niega a publicar el convenio entre YPF y Chevron, al tiempo que promete un plan energético que impulsaría la diversificación de la matriz energética (eólica), aunque sin cambios en el sistema energético.

Por último, el gobierno suele hablar del “cambio climático” y de “participación ciudadana”, aunque en realidad la narrativa del cuidado del ambiente es una fórmula vacía, ligada a una cultura del marketing y unos pocos eslóganes efectistas, más que a una propuesta de discusión integral sobre las consecuencias socio-ambientales, culturales y políticas de los actuales modelos de desarrollo. Un ejemplo ilustrativo es lo que sucede en Jáchal, San Juan, donde la vía judicial y la institucional han sido bloqueadas. Por un lado, por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la causa contra la empresa Barrick por el derrame de cianuro sucedido en septiembre de 2015 fue oportunamente desviada a la complaciente Justicia provincial. Por otro lado, por presión de los sectores mineros y del propio gobernador, se impidió dar vía libre a la consulta ciudadana que reclama la población. En fin, el nuevo oficialismo y sus aliados repiten y empeoran la historia legada por el progresismo kirchnerista, cerrando incluso las vías de la institucionalidad a los reclamos socioambientales más urgentes de las poblaciones.

Pese a la adversidad, en el frente socioambiental hay que destacar la acumulación organizativa producto de las resistencias durante la década kirchnerista, traducida en la consolidación de numerosos colectivos asamblearios y en la visibilización de los reclamos territoriales de los pueblos originarios, ante el avance de las fronteras del extractivismo y del acaparamiento de tierras. Aunque son conflictos que suelen situarse en la periferia (respecto de los conflictos sindicales, de carácter más central), su ingreso a la agenda nacional,

siempre transitorio y fugaz, tiende a ser más relevante que en los años anteriores. Algunos triunfos, como la suspensión definitiva de la construcción de la planta de semillas en la localidad de Malvinas (Córdoba) por parte de la multinacional Monsanto, tienen como contracara el avance de una Ley de Semillas en el Congreso de la Nación, donde lo que está en juego parece ser la cuestión del patentamiento (que enfrenta a corporaciones locales con Monsanto) y no el paquete tecnológico (transgénicos más glifosato), desestimando las graves denuncias en cuanto a los impactos socio-sanitarios del modelo de agronegocios.

Por último, en un marco de empobrecimiento y de temor a la recesión, existe el peligro –o la tentación– de asistir a un contexto de unidimensionalización de las resistencias, aun si en la actualidad se registra una conexión mayor entre ambas líneas de acumulación, la sindical-urbana y la socio-ambiental, esto es, entre centros y periferias, respecto de la conflictividad social.

El mensaje de los barrios

Lo más notorio del escenario pos-progresista es el creciente protagonismo de las organizaciones socioterritoriales, asociadas a las demandas de paz, pan, techo y trabajo. La movilización multitudinaria del pasado 7 de agosto, el día de San Cayetano, desde Liniers hasta Plaza de Mayo, marca el retorno de los barrios a la política nacional, luego de una década de subalternización, bajo el modelo kirchnerista, que había logrado el control sobre diferentes organizaciones territoriales, gracias a la combinación entre planes sociales, clientelismo afectivo y oportunidades de consumo. Probablemente estemos frente a un nuevo desborde plebeyo, que viene de la mano de organizaciones de raigambre piquetera, como la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie (Libres del Sur) y la heterogénea Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), un nuevo espacio conformado en 2015, que es un reagrupamiento de movimientos sociales territoriales, con fuerte presencia del Movimiento Evita (que abandonó recientemente el espacio kirchnerista), de empresas recuperadas, campesinos, cartoneros y otras organizaciones territoriales urbanas.

Sin embargo, este (nuevo) desborde de los barrios pone en evidencia otros problemas, puntos ciegos no tratados durante el ciclo kirchnerista, que dejan en evidencia la fragilidad actual del mundo popular. Así, el desborde popular viene a alertar sobre los alcances del narcotráfico en los barrios y su capilaridad, a través de la captación de los más jóvenes, que terminan siendo carne de cañón (2). En realidad, hace varios años que diferentes organizaciones sociales (sobre todo no kirchneristas) vienen denunciando la disputa cada vez más asimétrica en los barrios, a raíz de la expansión de bandas de narcotráfico y redes delictivas, que van desplazando –por la vía de la amenaza y la acción violenta– a las organizaciones sociales. Por ello no es casual la presencia de la Iglesia Católica (con sus curas vileros, alentados por el papa Francisco), en esta lucha desigual por el control territorial, donde lo que está en juego es la reconfiguración de las subjetividades populares. En suma, las organizaciones territoriales que vuelven a asomar con su potencia plebeya en el espacio político nacional no son sólo fruto de la acumulación; son expresión de una interpelación al Estado frente al hambre y la amenaza de desocupación, tanto como una lucha agónica de cara al narcotráfico, el cual sin dudas echaría más raíces en un contexto de mayor empobrecimiento.

A este panorama social cabe agregar otros elementos, pues contrariamente a lo esperable, tampoco hubo una despolarización del campo político. En realidad, el gobierno de Cambiemos exacerbó la brecha, a través de la implementación de una política de revancha, con despidos que alcanzaron áreas relevantes del Estado e involucran personal de planta, y del desmantelamiento de diferentes programas sociales y de inclusión cultural. Por otro lado, lejos de la autocrítica, pese a los casos de corrupción probados que involucran a importantes ex funcionarios, las reacciones del kirchnerismo van también en el sentido de la profundización de la brecha. La tentativa, por parte de un kir-

chnerismo militante de clases medias urbanas identificado con el modelo progresista anterior, de seguir hegemonizando ciertos aspectos de las luchas (a través de los “ruidazos” contra el tarifazo y las movilizaciones a favor de la ex Presidenta) se repiten, aun si su conexión con el mundo sindical y el universo deteriorado de los sectores populares plebeyos es casi nulo.

¿Hacia una nueva sociedad excluyente?

Así, la ruptura introducida por el gobierno de Cambiemos no significa una vuelta lineal al neoliberalismo, pero tanto el aumento acelerado de la pobreza como el ingreso a un escenario más desigualador han reactivado el fantasma de la polarización social, propio de los años 90.

Lo más notorio del escenario pos-progresista es el creciente protagonismo de las organizaciones socioterritoriales.

Hay que tener en cuenta que el ciclo kirchnerista se caracterizó por una mejora material en los sectores medios y populares, la cual habría marcado una reversión de las tendencias propias de los noventa, según afirma Gabriel Kessler (3).

Ciertamente, en los últimos 15 años se registró un fortalecimiento de las clases medias, a partir del aumento de la ocupación, del incremento de los salarios y la recuperación del consumo. Hay que tener en cuenta que históricamente las clases medias (urbanas), más allá de su heterogeneidad social, han jugado un rol central en la configuración de un imaginario acerca de la “excepcionalidad argentina”, como “un país más homogéneo, más igualitario”, respecto de otros países latinoamericanos, más marcados por la diferencia social o las grandes desigualdades. Sin embargo, esta representación se quebró durante la década de los 90. Provistas de un importante capital cultural, pero debilitadas en términos de capital económico y aspiraciones sociales, las clases medias fueron grandes protagonistas de las movilizaciones sociales que durante 2001 y 2002 derribaron o pusieron en jaque a varios gobiernos. Por ello mismo, durante la posconvertibilidad y con el ingreso al Consenso de los Commodities (4), el mejoramiento de sus posiciones económicas y el acceso al consumo no se vivieron, como afirma nuevamente Kessler, como una suerte de “democratización” –como sí sucedió en otros países, por ejemplo Brasil–, sino como la “recuperación” de un estándar de vida y de patrones de consumo, perdidos en la década anterior.

En esta línea, una segunda transformación asociada al kirchnerismo fue el mejoramiento de la situación de los trabajadores formales, gracias al crecimiento económico y la generación de empleo. Asimismo, hubo una reducción de sectores marginales y grupos no calificados respecto del período anterior, aunque el trabajo en negro se mantuvo en el 30%. Nuevamente, hay que tener en cuenta lo sucedido en el período anterior, cuando amplios sectores de la clase trabajadora urbana sufrieron un proceso de descolectivización y pasaron a engrosar el proletariado marginal (trabajadores informales o precarizados) o simplemente quedaron desempleados. La descolectivización masiva estuvo en el origen de una serie de movimientos de desocupados (piqueteros) que, entre 1997 y 2004, se constituyó en el gran actor social del conflicto en Argentina, realizando cortes de ruta en todo el país y reorganizando el tejido social en los barrios populares.

Por último, respecto de los sectores altos de la sociedad, hay que decir que también mejoraron sus posiciones durante el kirchnerismo. Claro que hubo modificaciones, entre las cuales hay que consignar cuatro fundamentales. Primero, hubo un desplazamiento del capital financiero (típico de los 90) hacia el capital productivo y extractivo (oportunidades que abrían la reactivación de la industria, el nuevo capitalismo agrario y la expansión de las fronteras del extractivismo). Segundo, hubo una acentuación de la concentración y extranjerización de la economía, →

→ que se fortaleció a partir de 2004 con la reactivación del mercado interno, dominado por oligopolios, y se vio potenciada por la extranjerización en las actividades extractivas (petróleo, megaminería). Así, en la actualidad el perfil de la cúpula empresarial se destaca por la notoria presencia de firmas extranjeras.

Tercero, luego de la crisis de 2001-2002, y durante los primeros años del kirchnerismo, los sectores dominantes optaron por adoptar una estrategia de “bajo perfil”. Sin embargo, a partir de 2004, la reactivación del consumo y la inversión repercutió en un afianzamiento del estilo de vida ligado a la segregación espacial (urbanizaciones privadas) y los consumos de lujo. Así, con el “retorno a la normalidad”, las clases altas volvieron a recuperar la confianza de clase, que había sido amenazada con la crisis y el default. Cuarto, el período se caracteriza por la expansión del nuevo paradigma agrario (agronegocios), el cual ilustra la emergencia de un nuevo perfil empresarial, cuya fusión con la vieja oligarquía agraria se haría ostensible en la medida en que el modelo de agronegocios fuera afirmándose como hegemónico.

En consecuencia, el ciclo kirchnerista se caracterizó por una mejora material en las condiciones de trabajo, ingreso y consumo de los sectores subalternos, al menos entre 2006 y 2011, época después de la cual el sostenido aumento de la inflación, el estancamiento en la creación de empleo privado, así como las políticas económicas implementadas potenciaron la crisis económica y trajeron como consecuencia, sobre todo en relación a los sectores populares, una licuación de las mejoras logradas. Por último, en sintonía con los últimos estudios sobre desigualdad en la región, es necesario relativizar las afirmaciones triunfalistas acerca de la reducción de los niveles de desigualdad operada durante la década progresista. Al contrario de lo que se venía afirmando, que América Latina era la única región del mundo donde habría disminuido la desigualdad, investigaciones recientes –centradas en las declaraciones fiscales de las capas más ricas de la población–, muestran que, al compás de la disminución de la pobreza, la región ha conocido una concentración mayor de la riqueza (5).

En suma, en muy poco tiempo el giro a la derecha logró reavivar uno de los traumas sociales más dolorosos que recorre la sociedad argentina, sobre todo desde los años 90, a saber, el fantasma del “retroceso social” (desempleo, descolectivización, movilidad social descendente) en sectores populares y ciertos sectores medios. Pero el punto de partida no es, como busca alimentar cierta mirada ingenua y mistificada sobre la década kirchnerista, el abandono de un “país igualitario” (el “mundo feliz peronista”), pues la reducción de la pobreza no fue acompañada por la disminución de las desigualdades. Finalmente, debemos ser conscientes de que el retorno de la polarización social y la movilidad social descendente, en un contexto de por sí tan amenazante y complejo para el mundo popular, donde se potencian narcotráfico, violencia y exclusión, instala la posibilidad del ingreso –no ya el retorno– a una situación de intemperie donde podrían forjarse los marcos de una nueva sociedad excluyente. ■

1. <http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo68/files/2016-Obs-Informe-n1-Pobreza-Desigualdad-Ingresos-Argentina-Urbana.pdf>
El nuevo informe, de agosto de 2016, señala el aumento de “nuevos pobres” como un “dato preocupante que no dejó de ser una estimación conservadora”, www.lanacion.com.ar/1927350-para-la-uca-crece-la-cantidad-de-nuevos-pobres.
2. Véanse las interesantes reflexiones de Rita Segato sobre la estatalidad, ligada no sólo a la violencia sobre las mujeres, sino a la relación territorialidad-narcotráfico: *Las nuevas formas de la violencia y el cuerpo de las mujeres*, Tinta Limón, Buenos Aires, 2014.
3. Gabriel Kessler (comp.), *La sociedad argentina hoy. Radiografía de una nueva estructura*, Siglo XXI-Osde, Buenos Aires, 2016.
4. Véase Maristella Svampa, “El Consenso de los Commodities”, *Le Monde diplomatique*, edición Cono Sur, Buenos Aires, junio de 2013.
5. Véase el número especial “¿Década ganada? El Estado y la (des)igualdad en América Latina”, y en particular el artículo del economista Pierre Salama, “¿Se redujo la desigualdad en América Latina? Notas sobre una ilusión”, *Nueva Sociedad*, Buenos Aires, julio-agosto de 2015; disponible en: <http://nuso.org/>

*Socióloga y escritora. Su último libro es *Debates latinoamericanos. Indianismo, desarrollo, dependencia y populismo*, Edhasa, Buenos Aires, 2016.
© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur

EL CATOLICISMO SOCIAL Y POPULAR

La Iglesia vs. Cambiemos

por Sol Prieto*

“La religión es el suspiro de la criatura oprimida, el corazón de un mundo sin corazón, el espíritu de una época carente de espíritu. Es el opio del pueblo” escribió Karl Marx en 1843. La segunda parte de la frase pasó a la historia y todavía se puede escuchar en los pasillos de las universidades o en las reuniones de algunas organizaciones políticas. La primera parte, en cambio, tuvo menos fama, probablemente porque la complejidad del mensaje es difícil de procesar aún en la actualidad. ¿La Iglesia se opone a la modernidad capitalista o la reproduce? Se opone y la reproduce.

En 1977, el sociólogo del catolicismo Émile Poulat publicó el libro *Iglesia contra burguesía*, que amplió el horizonte analítico de los estudios sobre catolicismo señalando justamente esta cuestión: no hay un solo catolicismo, por lo tanto no hay una sola Iglesia y, por lo tanto, eso que llamamos “la Iglesia” es el resultado de una serie de pujas entre los distintos catolicismos para definir los vínculos con la modernidad capitalista. En 1985, Fortunato Mallimaci publicó en la revista *Sociedad y Religión* una reseña sobre este trabajo en la que remarcó el carácter casi provocador de esas afirmaciones a la luz del caso argentino, donde el apoyo de la jerarquía eclesiástica a múltiples dictaduras militares capitalistas dejó tan al descubierto las alianzas entre Iglesia y burguesía que opacó las situaciones de resistencia o enfrentamiento. Sin embargo, éstas ocurrieron varias veces en la historia argentina, fundamentalmente ante la crisis del Estado liberal en la década de 1930, y luego como expresión postconciliar en la década del 70.

En la década del 90, la jerarquía de la Iglesia coincidió con las posiciones gubernamentales ante temas sensibles para el catolicismo como la educación, los derechos de las mujeres y los derechos sexuales y reproductivos pero, a medida que las políticas liberalizadoras comenzaron a dejar secuelas, los obispos y sacerdotes alertaron sobre la situación de emergencia social, participando cada vez más visiblemente en la esfera pública.

Politización intensa

Con el gobierno de Cambiemos, el catolicismo volvió a emerger como un actor social y político relevante ante los nuevos consensos pro-mercado y sus consecuencias. Esta emergencia se puede observar en cinco dimensiones. La primera está vinculada al discurso del papa Francisco en contra de las economías financieras, la destrucción de los Estados de Bienestar y la restricción en términos de derechos y ciudadanía que ambos procesos traen aparejada. Este discurso permea con fuerza la prédica opositora en la Argentina actual en dos sentidos. Por un lado, porque citando al Papa los políticos aspiran a traccionar su legitimidad y su carisma, de cuño religioso, y convertirlos en legitimidad política. Por otro lado, porque en muchos casos el Papa funciona como un dirigente cuya línea e inventiva superan a las de los políticos; toman su discurso porque no cuentan con otro superador.

La segunda dimensión tiene que ver con el surgimiento de articulaciones sociales, como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), en las que el catolicismo influye en tres sen-

tidos. En primer lugar, estas articulaciones cuentan con el apoyo del Papa y sus dirigentes (Emilio Périco, Juan Grabois) se muestran junto a él en fotos, lo citan en sus discursos, comunican mensajes que supuestamente les transmitió en reuniones, etc. En segundo lugar, cuentan con estrategias liminares de desarrollo territorial, en las que los espacios creados por las organizaciones que las integran (por ejemplo, los Misioneros de Francisco) son al mismo tiempo religiosos y de militancia política. En tercer lugar, porque se valen de expresiones propias de la religiosidad popular como las fiestas de San Cayetano o de la Virgen de Luján para expresar demandas populares más amplias.

La tercera dimensión tiene que ver con una politización intensa de algunos actores religiosos, como los Curas en la Opción Preferencial por los Pobres. Este grupo de sacerdotes se manifiestan contra el gobierno a través de distintos dispositivos. El principal son las llamadas “Cartas al pueblo de Dios” en las que denuncian el agravamiento de la situación social. En segundo lugar, mantienen reuniones públicas con dirigentes opositores de peso como Cristina Fernández de Kirchner, generalmente en barrios muy pobres. En tercer lugar, recientemente organizaron una huelga de hambre exigiendo que se levantara la incomunicación de la dirigente jujeña Milagro Sala, que se encuentra presa por motivos políticos. Esta posición difirió fuertemente de la de los obispos de Jujuy y Humahuaca, quienes ni bien se produjo el arresto de Sala tomaron distancia y aseguraron no apoyar a la organización Tupac Amaru, que ella dirige. Por último, son parte de distintas iniciativas de oposición social tales como la procesión del día de San Cayetano o, próximamente, la Marcha Federal.

La cuarta dimensión está vinculada a la trama de ayuda social de la Iglesia a través de los comedores, merenderos y hogares parroquiales, la mayoría sostenidos por Cáritas. Este tipo de espacios permanecen más allá de las coyunturas: se llenan en las épocas malas y pocas veces, cuando el ciclo mejora, se vacían. Sus posicionamientos frente a los gobiernos tienden a ser más prudentes porque reciben ayuda estatal, lo cual, a la vez, explica su permanencia.

Por último, la Conferencia Episcopal, a través de diferentes órganos y voceros, también denunció cuestiones vinculadas a las políticas recesivas del gobierno tales como lo que los obispos llaman “la fragilidad laboral”, la pobreza y el agravamiento de la inflación y sus consecuencias sobre los sectores populares. La Pastoral Social, de la cual es titular nacional el obispo de Gualeguaychú, Jorge Lozano, cumple el rol más importante de la jerarquía eclesiástica en este sentido.

En suma, dada la heterogeneidad ideológica y jerárquica de rechazos a las nuevas políticas económicas presente en la Iglesia argentina, es posible imaginar una etapa en la que el catolicismo tendrá una mayor inserción social y una prédica antiliberal que hará hincapié en la inclusión de los pobres y la dignidad de la vida humana por sobre la riqueza y la productividad, dos valores muy presentes en el discurso de Cambiemos. ■

*Socióloga.

© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur